PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

Carlos y Magdalena, libres
El caso de Aguililla, Mich.

Hace una semana, al comenzar la entrevista con el procurador Ignacio Morales Lechuga, que aparece en el número de hoy de *Mira*, el abogado veracruzano me recibió con una buena noticia: "Hoy, a las 14:45, salieron de la cárcel Carlos Valencia y Magdalena Vera". Tras la frase escueta, extraña en el hombre que en el prejuicio público se encarga de perseguir a los delincuentes, en vez de promover la libertad

3-Julio-91

de los que no lo son, se atropellaba una historia larga de 13 meses, que ha tenido ahora un final feliz, feliz para quien tenga capacidad de olvidar el drama y la tragedia que se incubaron en mayo de 1990 en Aguililla, Michoacán.

La libertad de Valencia y Vera es parte de la política de rectificaciones que, en materia de derechos humanos, realiza la Procuraduría General de la República a raíz de la designación de su nuevo titular. El 16 de junio había quedado en libertad Antonio Valencia Fontes, cuyo caso, con el de Aguililla, constituyó el punto más agrio de discrepancia entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría de la República.

El asunto de Valencia Fontes, considerado por la Comisión como un caso de "injusticia manifiesta", consistió en que ese abogado sonoreNSE y cuatro personas más fueron detenidas arbitrariamente en Mexicali en noviembre de 1989, y remiti-

das a la ciudad de México, todo para que no pudieran localizar a Sergio Machi, un obregonense radicado en la capital de Baja California. Valencia Fontes lo vio, detenido en los separos de la policía judicial y meses después se localizó el cadáver de Machi, calcinado para evitar su reconocimiento. Ese hallazgo vino a constituir, de refilón, la prueba inequívoca de la inocencia de Valencia Fontes y coacusados, de la arbitrariedad policiaca, no obstante lo cual la Procuraduría demoró en revisar las circunstancias en que habían sido asesinado uno y encarcelados los otros, y en responsabilizar a su propio personal, ostensiblemente relacionado con esos negros episodios. Esa parte de la historia, por cierto, sigue pendiente no obstante el buen desenlace en relación con Valencia Fontes y las otras personas que padecieron 18 meses de injusta prisión.

Fue más breve el cautiverio, pero no menos injusto, de los michoacanos encarcelados en mayo de 1990 a causa de un

tiroteo ocurrido en Aguililla, en el cual murieron tres agentes de la policía judicial federal, que presunta o realmente perseguían a narcotraficantes, y un habitante del poblado. Entre los detenidos injustamente estaba el propio alcalde del pueblo, Salomón Mendoza Barajas, elegido en diciembre anterior, a la cabeza de una planilla apoyada por el Partido de la Revolución Democrática. También fue detenido Javier Rosiles, que no cometió más pecado que hallarse en las inmediaciones de la población cuando ocurrió la furiosa redada con la que los agentes judiciales querían vengar la muerte de sus compañeros. Rosiles vende mercancía lo más distante posible de los estupefacientes, de cuyo tráfico se le acusó, pues se dedica a la venta de rosarios y otros artículos religiosos.

Gracias a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, ambos fueron puestos en libertad en noviembre anterior. Pero no siguieron esa misma suerte Magdaleno Vera García y Carlos

Valencia Morfín, involucrados en la misma medida en el caso, es decir, en ninguna. En su informe del 6 de junio pasado, la CNDH explicó que "la Procuraduría General de la República ha enviado recientemente documentación diversa que, desde su punto de vista, demuestra la responsabilidad de ambos procesados. La Comisión Nacional está revisando minuciosamente toda la documentación del caso, para dar la correspondiente contestación. La PGR tampoco aceptó la recomendación respecto a la petición de sobreseimiento relativo a las causas penales que se siguen en contra de seis personas que gozan de libertad provisional. Asimismo, la Comisión Nacional está a la espera de la conclusión de las investigaciones relacionadas con la probable responsabilidad penal de los agentes del ministerio público y de la policía judicial federal que intervinieron en esos hechos".

El sobreseimiento finalmente se pidió, fue acordado y Magdaleno y Carlos están libres.